

**Informes del SIDE Chile**  
**DE LA COLUMNA DE PATRIO MAGUIRE – FORO DE SEPRIN**  
16-10-2000

Damos desde hoy, el inicio de una serie de informes altamente secretos; donde al final, los lectores del FORO, podrán sacar sus propias conclusiones pudiendo tener mas claro porqué un Estado (el cuál es sin lugar a dudas democrático) se convierte en TERRORISTA.

Debajo del Estado se mueve otro estado paralelo que asegura la fidelidad de las provincias respecto a la metrópoli norteamericana. Otro estado que realiza trabajos especiales con los que se reconducen las democracias que toman rumbos independientes.

En noviembre de 1990 un juez italiano que investigaba el terrorismo hizo pública la existencia de la Red Gladio: un ejército secreto vinculado a la OTAN y creado por la CIA durante los años 50 para impedir con cualquier medio (terrorismo incluido) la llegada al poder de partidos o personas sin la adecuada sintonía con Washington.

---

LA RED GLADIO, EL MODELO AMERICANO-CUIDANDO LOS INTERESES DE ESTADOS UNIDOS

Paraguay gozó de un gran prestigio entre los criminales anticomunistas de diversas regiones del mundo durante el período dictatorial del general Alfredo Stroessner, de 1954 a 1989. Además de su ubicación estratégica en América del Sur, Paraguay les ofrecía una "estabilidad política envidiable", garantías de impunidad de los delitos cometidos "y por cometerse", así como todo tipo de facilidades jurídico-administrativas, financieras, y logísticas.

Fascistas italianos, nazis alemanes, terroristas croatas y cubanos, anticomunistas argentinos, brasileños y españoles, sicarios bolivianos, genocidas chilenos, y todo tipo de militares y civiles involucrados en violaciones de los derechos humanos, tráfico de armas, espionaje, y operaciones criminales eligieron Paraguay como su lugar de refugio, y fueron acogidos por las más altas autoridades del país como "combatientes por la libertad" y "héroes internacionales".

El régimen dictatorial conducido por el general Stroessner, con la colaboración de militares y empresarios conservadores, ofreció el contexto de "paz" e impunidad que buscaban criminales como el médico nazi Josef Mengele, el jefe de la Logia Masónica P-2 Licio Gelli, el franquista español Juan León Córdón, entre otros personajes anticomunistas que se establecieron en Paraguay. Muchos de los agentes secretos chilenos, responsables de graves violaciones a los derechos humanos, detenciones y desapariciones, como Miguel Estay Reyno, "El

Fanta" continuaron hasta 1992 residiendo con nombres falsos en Paraguay.

Ya desde fines del siglo pasado Paraguay había ejercido una fuerte atracción para racistas alemanes como el doctor Bernard Forster, quien fundó allí la colonia Nueva Germania, con el objetivo de aplicar su programa de pureza racial.

El "modelo paraguayo" de totalitarismo que aseguraba la "paz social a cualquier costo" fue elogiado entre otros por el entonces Presidente norteamericano Richard Nixon, quien reconoció que Paraguay constituía un eje estratégico clave para la lucha contra el comunismo. El 4 de mayo de 1968, al llegar a Asunción, Nixon le dijo a Stroessner: " En el campo de los asuntos internacionales, no conozco otra nación que se haya levantado más fuerte que la suya en contra de la amenaza del comunismo".

La dictadura paraguaya despertaba envidias entre los militares del cono sur de América, que igualmente aspiraban a dirigir el destino de sus países por períodos prolongados que les permitieran concretar sus proyectos a largo plazo. Por esta razón, muchos de los principales agentes secretos de las tiranías latinoamericanas confluyeron en Paraguay en diversas oportunidades a fin de aprender de su experiencia represiva y coordinar estrategias para "limpiar a la región de la potencial amenaza del comunismo y la subversión.

Desde fines de los años 60 existían relaciones fluidas entre oficiales de las fuerzas armadas de Sudamérica, quienes habían recibido juntos especialización contrainsurgente en las academias militares norteamericanas, donde se forjaron lazos de amistad y familiaridad. En otras etapas al interior de la región, militares latinoamericanos habían convivido por períodos de seis meses a dos años en centros de formación de Argentina o Panamá. Estas relaciones de militares argentinos con sus similares uruguayos, paraguayos, brasileños, chilenos, bolivianos y peruanos, tendrían sus frutos en los años de las dictaduras, algunos de los cuales veremos a continuación.

### **EL CASO PRATS**

El 30 de setiembre de 1974, en Buenos Aires, a las 00.40 horas, cuando retornaban a su domicilio luego de una reunión social, el ex Vice Presidente de Chile y Ministro de Estado en el gobierno de Salvador Allende, general Carlos Prats González y su esposa Sofía Cuthbert sufrieron un atentado con una bomba a control remoto que les quitó la vida.

Así culminó uno de los primeros operativos en el exterior de la Dirección de Inteligencia Nacional de Chile, DINA, comandada por el general Manuel Contreras, quien consideraba a Prats como uno de los rivales de más fuerza del general Augusto Pinochet.

Entre los responsables del atentado contra los Prats se identificó a Michael Townley, norteamericano experto en electrónica y agente especial de la DINA, Juan Luis Bulnes Ossa, chileno ultraderechista, y el mayor del ejército chileno Armando Fernández Larrios, quien en octubre de 1973 integró la "caravana de la muerte", del general Sergio Arellano Stark,

que masacró a 72 prisioneros en cinco ciudades chilenas. Para el seguimiento de Carlos Prats, en la fase preparatoria del crimen, los agentes chilenos utilizaron placas de la Dirección Federal de la Policía de Buenos Aires, credenciales de la Dirección de Migraciones, automóviles asignados al ejército argentino, etc. Así como este, hubo muchos otros casos en los que policías o militares chilenos actuaron con total libertad en territorio argentino contra ciudadanos que huían del régimen de Pinochet.

### **EL CASO LEIGHTON**

Otro Ex Vice Presidente de la República de Chile, y abierto opositor al régimen de Pinochet estuvo en la mira de los servicios de inteligencia. Ahora se trataba de Bernardo Leighton, alto dirigente del Partido Demócrata Cristiano, a quien cuando se hallaba de visita en Roma se le prohibió regresar a su país, bajo la acusación de desarrollar "actividades antichilenas". Leighton promovió el acercamiento de la Democracia Cristiana con los grupos políticos de izquierda, a fin de trabajar juntos por el retorno al sistema democrático en Chile.

El 6 de octubre de 1975, Pier Luigi Concutelli y Salvatore Falabella, neofascistas italianos, aliados de Stefano delle Chiaie, temporalmente al servicio de la DINA, atentaron contra Bernardo Leighton y su esposa, cuando estaban por ingresar a su domicilio en Roma. Leighton recibió un disparo en la frente y la bala salió por su oído izquierdo. Ana Fresno, su esposa, fue baleada en el pecho. Ambos sobrevivieron luego de varias intervenciones quirúrgicas y pudieron identificar a sus agresores.(4) Michael Townley, el norteamericano integrado a la DINA, que actuaba también con el nombre de Kenneth Enyart, y su esposa Mariana Inés Callejas, chilena ocultada bajo el nombre Ana Pizarro, habían coordinado en Europa (igual que en el caso Prats) los detalles para el crimen de Bernardo Leighton, encargado a los grupos Avanguardia Nazionale y Ordine Nuovo, de Stefano delle Chiaie. Incluso se contó con el apoyo de agentes de la policía secreta del régimen franquista español, según reveló el fascista italiano Aldo Tisei a la Corte de Bologna.

### **EL CASO LETELIER**

El 21 de setiembre de 1976 la DINA ejecutó otro de sus operativos en el exterior. Esta vez actuó en el corazón mismo del gigante norteamericano, asesinando en Washington D.C. a Orlando Letelier, ex ministro de Estado en el gobierno de Salvador Allende, y personaje clave de la oposición chilena, a quien pocos días antes Pinochet le había quitado la nacionalidad, por "haber llevado a cabo en países extranjeros una campaña publicitaria tendiente al aislamiento político, económico y cultural de Chile", y "por influir en la política exterior norteamericana demandando la suspensión total de su ayuda militar a Chile". En el atentado, cometido con bomba a control remoto, también murió Ronnie Moffit, quien trabajaba con Letelier en el Instituto de Estudios Políticos.

Igual que en los casos antes mencionados, el responsable de coordinar el operativo fue el norteamericano Michael Townley, un agente incondicional a Manuel Contreras, jefe de la DINA. "Desde que lo liberamos, Letelier

ha estado dando problemas al gobierno en el exterior", le dijo Pedro Espinoza, asistente principal de Contreras, a Townley, cuando le precisó las instrucciones para la misión de asesinar a Letelier en Estados Unidos.

Para este asesinato el Mayor del Ejército chileno Armando Fernández Larios realizó previamente un minucioso trabajo de seguimiento de Orlando Letelier en Washington D.C. Townley confesó a la justicia norteamericana que él mismo, con la ayuda del cubano anticastrista Virgilio Paz, fabricó el artefacto explosivo a control remoto y lo colocó en el automóvil de Letelier. En el crimen también participó Dionisio Suárez, del Movimiento Nacionalista Cubano.

Unas semanas antes, agentes secretos chilenos habían obtenido en Asunción pasaportes paraguayos y visas para ingresar a los Estados Unidos. También la cancillería chilena entregó a agentes de la DINA pasaportes con nombres falsos. Ahora, con el descubrimiento de los archivos del terror, en Paraguay, se confirma que el asesinato de Letelier fue gestado por Manuel Contreras, dentro de la "Operación Cóndor".

#### LA OPERACION CONDOR

De acuerdo a las investigaciones realizadas en relación al asesinato de Orlando Letelier, se ha logrado establecer que el general chileno Manuel Contreras, jefe de la DINA, concibió y organizó la Operación Cóndor, que tuvo como tarea "La recolección, el intercambio y el almacenamiento de datos de inteligencia relacionados con los activistas de izquierda, los comunistas y los marxistas, con el fin de eliminar a los terroristas marxistas y sus acciones en la zona". Esta acusación ha sido ratificada con algunos documentos hallados en los archivos secretos de la policía paraguaya.

Contreras viajó hacia Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela y Estados Unidos, para exponer su proyecto represivo supranacional y convencer a los jefes de los servicios secretos de estos países sobre la importancia de la coordinación y cooperación "para eliminar al comunismo" y defender la sociedad "occidental y cristiana".

El general Contreras sostuvo desde 1974 varias entrevistas con el general Ramón Camps, Jefe de la Policía de Buenos Aires, quien años después diría que "en Argentina no quedan desaparecidos con vida. Asumo toda la responsabilidad y me siento orgulloso". Otro colaborador de Contreras, el general Iberico Saint Jeant, Interventor de la Provincia de Buenos Aires igualmente dijo en la época del Proceso: "Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, luego a sus simpatizantes, luego a quienes permanezcan indiferentes, y por último, a los indecisos."

En agosto de 1975 en su esfuerzo para concretar la "Red Cóndor", Manuel Contreras se entrevistó en Washington D.C. con Vernon Walters, director adjunto de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los EE.UU. En Venezuela se reunió con Rafael Rivas Velásquez, director del Servicio de Inteligencia venezolano. En Paraguay habló con los generales Benito

Guanes Serrano, jefe de Inteligencia del Estado Mayor y Francisco Brites, Jefe de la Policía de la República.

Entonces, en el marco de la "Operación Cóndor" se logró concretar acuerdos amplios entre los servicios secretos de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, y se animó a la participación de Brasil y Perú. El campo de acción fue fijado entre los límites de todos los países miembros del acuerdo, estableciéndose facilidades para el desplazamiento clandestino de agentes de estos países, y la ejecución de operaciones represivas conjuntas.

También se aprobó la formación de equipos especiales de los países miembros, para viajar a cualquier parte del mundo, con el objetivo de eliminar a políticos opositores, subversivos o colaboradores de los grupos terroristas de cualquiera los países de la Operación. En el marco de este acuerdo se realizaron los operativos antes mencionados. Aún antes del golpe de estado en Argentina (marzo de 1976), ya se habían logrado acuerdos entre los servicios secretos de ese país y de Chile, para el intercambio de información "clave" y para facilitar la captura de militantes izquierdistas chilenos. Esta cooperación se logra perfeccionar con la "Operación Cóndor".

Numerosos militantes y simpatizantes de izquierda, chilenos, uruguayos, paraguayos, brasileños, y bolivianos, establecidos temporalmente en Argentina fueron capturados en ese territorio así como en Paraguay, por agentes policiales de sus respectivos países, en el contexto de esta coordinación represiva llamada "Operación Cóndor".

Tal como se ha demostrado en diversos procesos judiciales, los servicios secretos de Chile y Paraguay tuvieron a su disposición las líneas aéreas estatales, (LAN CHILE, Líneas Aéreas Paraguayas) así como "carta blanca" en las cancillerías, el servicio de correos, los tribunales de justicia, etc.

Igualmente encubrieron sus actividades con empresas comerciales e industriales "fantasmas". En Chile se crearon 30 empresas ficticias al servicio de la DINA y un centro de operaciones formal: La Empresa Pesquera Chile, de San Antonio. La incursión en el mundo empresarial y financiero sentaría las bases para crear mecanismos de protección de los agentes secretos, una especie de ODESSA chilena, dirigida por el general (R) de la Fuerza Aerea Chilena, Vicente Rodríguez.

Desde mayo de 1975 numerosos activistas políticos chilenos son detenidos por la policía argentina y paraguaya y luego son entregados a la DINA. Jorge Isaac Fuentes Alarcón, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, fue arrestado por la policía paraguaya cuando cruzaba en ómnibus la frontera desde Argentina. Después fue entregado a los agentes de la DINA en Paraguay y trasladado ilegalmente a Santiago, a Villa Grimaldi, donde se perdieron sus rastros. En la captura e interrogatorios de Fuentes Alarcón participaron, según estableció la Comisión Rettig, "los servicios de inteligencia argentinos, personeros de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, que mantenía informada a la Policía de Investigaciones de Chile del resultado de los interrogatorios, y la policía paraguaya, que capturó y permitió el traslado clandestino del militante chileno".

Jean Yves Claudet Fernández, de nacionalidad franco-chileno, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR de Chile, fue detenido el 1.11.1975 en el Hotel Liberty de Buenos Aires y después fue ejecutado por agentes de la DINA en esa ciudad. Aquí también hubo una colaboración muy cercana de policías argentinos con los agentes chilenos de la DINA, a fin de neutralizar la resistencia política de los activistas del MIR. La Comisión de Verdad y Reconciliación de Chile, en su Informe Final documenta los casos de 33 ciudadanos chilenos desaparecidos tras ser capturados por agentes argentinos, paraguayos o brasileros y entregados a la DINA, solo entre 1975 y 1976.

El 22 de diciembre de 1992 el Juez José Agustín Fernández, descubrió casualmente el archivo secreto de la inteligencia represiva paraguaya, en una oficina de la "Sección Política y Afines" de la Policía de Investigaciones de Asunción, mientras investigaba el caso de Martín Almada, un profesor que había sido detenido y torturado en Asunción. "Yo llevaba el proceso de una persona que había sido detenida y torturada entre 1974 y 1977. En ese caso él (Martín Almada) había solicitado sus antecedentes policiales por lo que procedimos a investigar en qué cuartel policial se encontraban" declaró el Juez Fernández. "El jefe de la policía de investigaciones nos dijo que estos archivos y antecedentes habían desaparecido durante el golpe de estado de febrero de 1989. No quedamos contentos con esa respuesta", agregó. Fernández explicó que Martín Almada, investigó dentro de los círculos policiales y consiguió una información confidencial que le confirmó la existencia de los archivos. Entonces, de manera reservada se dirigieron a un lugar indicado donde descubrieron lo que el periodismo paraguayo bautizó como "Los archivos del terror".

"Cuando lo descubrimos era tanta la cantidad de documentos que era imposible dejarlos a disposición de la policía porque podrían destruirlos, quemarlos. Así que con la ayuda de un camión del Diario Noticias de Asunción los llevamos a mi despacho, y luego a un depósito del Palacio de Justicia", declaró el Juez. En los archivos abundan documentos relacionados a casos de detenidos y desaparecidos paraguayos que el gobierno siempre había negado tenerlos bajo su poder, por lo cual el Juez Fernández sostuvo : " Hay testimonios de que en Paraguay hubo tortura, encarcelamiento de activistas políticos, un estilo de vida, un sistema de control sistemático de mucha gente". Estos documentos van a dar muchas luces en los 18 procesos sobre violaciones a los derechos humanos que actualmente se ventilan en los tribunales de ese país.

El ex dictador Alfredo Stroessner, ha sido implicado recientemente en el asesinato de Benjamín y Rodolfo Ramírez, dos hermanos acusados de pertenecer al grupo armado opositor, Organización Política Militar, que supuestamente intentaba derrocarlo. Según los documentos hallados en los archivos secretos, Stroessner conocía todos los detalles de este y de otros crímenes, y había intercambiado comunicaciones con el jefe de investigaciones de la policía, Pastor Coronel, unos de los más sanguinarios torturadores de Paraguay.

Lo sorprendente del caso es que este archivo de los servicios de

seguridad de Paraguay, incluye también numerosos documentos relacionados a la "Operación Cóndor" gestada por Manuel Contreras, el conocido violador de los derechos humanos, jefe de la DINA. La documentación hallada ha confirmado que en el marco de este "Acuerdo de Cooperación" se cometieron los asesinatos del ex ministro chileno Orlando Letelier, del ex presidente de Bolivia, general Juan José Torres, asesinado en Argentina; de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como del doctor Agustín Goyburú, dirigente del Movimiento Popular Colorado, de Paraguay, y de cientos de activistas políticos chilenos, argentinos, paraguayos, y brasileños.

Aún más, recientemente el general paraguayo Benito Guanes Serrano, ex jefe de inteligencia del ejército, declaró ante el juez Arnulfo Arias, que en 1977, por su función de enlace entre la policía de Asunción y los agentes extranjeros, estuvo presente en la entrega de cinco personas arrestadas en Paraguay, a funcionarios de inteligencia de Argentina y Uruguay. Los "expulsados" de Paraguay fueron los uruguayos Gustavo Edison Insaurralde y Nelson Rodolfo Santana Scotto, y los argentinos Alejandro Logoluso Dio Martino, José Boll y Dora Landi Gill, quienes luego desaparecieron. Ahora el general Benito Guanes se halla con detención preventiva ordenada por el juez Néson Mora, por el asesinato de los hermanos Benjamín y Rodolfo Ramírez Villalba. El atentado contra el Dr. Bernardo Leighton también fue parte de la "Operación Cóndor". Se ha encontrado correspondencia de la policía de la región, registros y hojas de entrega de detenidos, fichas, fotografías y pasaportes de activistas de izquierda argentinos, chilenos, paraguayos y brasileños; planes de eliminación de sospechosos, reportes de desplazamientos de subversivos por el cono sur, análisis de las actividades de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, ONGs de Paraguay, así como informes detallados dirigidos a Stroessner sobre asesinatos de sus opositores políticos.

También hay allí documentación que facilitó la estadia en Paraguay de mercenarios croatas, italianos, cubanos, chilenos, entre otros, y sobre la presencia de los criminales nazis en el cono sur de América, así como sobre el asesinato de agentes israelíes que los perseguían, las conexiones de los servicios secretos con la CIA norteamericana y el narcotráfico. Hay suficientes e irrefutables pruebas de que se practicó el terrorismo de estado a escala internacional. La documentación hallada y los testimonios de varios de los agentes implicados, demuestra la complicidad de la policía y el gobierno de Paraguay con la brutal represión ejercida por las dictaduras de Argentina y Chile, así como con la de Brasil y Bolivia. También demuestra como el general Augusto Pinochet amparó la práctica del terrorismo de estado dentro y fuera de su país. Hay evidencia de que tanto Pinochet como Stroessner dedicaron especial atención al fortalecimiento y la coordinación de sus servicios de seguridad, objetivo para el cual se reunieron en diversas oportunidades.

Se alcanzó tanta eficiencia en la represión a los disidentes políticos, que incluso funcionarios del Departamento de Estado norteamericano reconocieron que "Los servicios de inteligencia del cono sur se han reunido y tienen un programa claro de ayuda mutua. La policía secreta anda por el mundo con gran libertad. En América Latina el sistema

funciona casi a la perfección", tal como lo afirmó Patricia Derian, subsecretaria para asuntos de derechos humanos en A.L. del Departamento de Estado.

**PORQUE NO SE DESTRUYERON LOS ARCHIVOS DE LA REPRESION?**  
Es probable que los altos jefes militares y policiales implicados en las violaciones de los derechos humanos y que participaron de la "Operación Cóndor" tenían la esperanza de la restauración de la dictadura de Stroessner.

Cayeron en un exceso de confianza que los inmovilizó ante cualquier necesidad de destruir documentación que aunque era acusatoria contra ellos, al mismo tiempo les iba a seguir siendo útil en el futuro. Los registros de inteligencia están actualizados con respecto a Paraguay hasta el año 1991, dos años después del golpe que quitó el poder a Stroessner y terminó con su dictadura.

En realidad el descubrimiento de los "Archivos del Terror" se logró gracias a que policías descontentos con sus jefes colaboraron con las autoridades judiciales. Estos mismos policías han denunciado cómo reina la corrupción al interior de los organismos castrenses y policiales. Para nadie en Paraguay era un misterio saber que los más altos jefes policiales y militares, intendentes, funcionarios públicos vinculados al general Stroessner formaban parte de la inmensa cadena de corrupción moral y política tejida en los largos años de dictadura de Stroessner. El contrabando de autos robados en Brasil y Uruguay, y su posterior venta en Bolivia y Perú, el tráfico de cocaína, los casinos de juego, el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, las cadenas de prostitución entre innumerables actividades ilícitas, eran ejercidas abiertamente por algunas de las más altas autoridades policiales y militares de Paraguay, tal como se ha comprobado en los últimos meses.

Más que dedicarse a su función de seguridad muchos de los jefes policiales y militares estaban atareados en la administración de sus negocios corruptos y llevaban una vida disipada, confiados en la impunidad con la que la dictadura los había premiado por su lealtad para mantener el orden establecido y "la paz nacional".

El coronel de Infantería paraguayo Luis Catalino Gonzáles Rojas, denunció en octubre de 1992 a varios de estos jefes militares y policiales implicados directamente en el contrabando de autos robados como el general de división Humberto Garcete, Comandante en Jefe del Ejército, y los generales Emilio Balbuena, Aladino Enciso, y Lorenzo Carrillo, quienes han sido procesados y sancionados por ese delito.(14) El Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, general Francisco Sánchez, ha sido destituido y procesado por extorsiones, estafa y por haberse apropiado ilícitamente de una empresa de juegos de azar. Francisco Brites, el tristemente recordado Jefe de la policía de Paraguay, amigo de Manuel Contreras, de la DINA, es propietario, junto con su esposa, de 130,000 hectáreas de terreno y de casi un centenar de fincas por todo el país.

Hoy estos jefes del ejército y de la policía de Paraguay enfrentan diversos procesos judiciales por sus delitos vinculados al contrabando

de autos robados, la falsificación de documentos, la malversación de fondos públicos, etc. Sus actividades "empresariales" desplazaron a las ocupaciones policiales.

De esta forma se explicaría que los principales jefes de la policía y el ejército de Paraguay, vinculados al sistema Cóndor de represión hayan descuidado la seguridad de su archivo central, que está abriendo nuevos conocimientos sobre las actividades encubiertas de los servicios secretos del cono sur de América, y están ayudando a interpretar y comprender más cabalmente el destino de cientos de luchadores sociales y activistas políticos latinoamericanos.

Los documentos hallados se están procesando con la ayuda de personal de los organismos defensores de los derechos humanos de Paraguay, luego de rechazarse un ofrecimiento de la Agencia Interamericana de Desarrollo, AID, de los EE.UU., organismo que se ofreció para microfilmear los archivos.

Diputados paraguayos acusaron a la AID de pretender borrar las huellas de la colaboración de los servicios secretos de los EE.UU. con la dictadura paraguaya y los sistemas represivos del cono sur. Convencidos de la importancia de la documentación descubierta, abogados y representantes de organismos de derechos humanos de Brasil, Argentina y Chile, viajaron a Asunción, a revisar "los archivos del terror", en los cuales han encontrado evidencias inculpatorias contra los jefes de los servicios secretos de la región.

Con el descubrimiento de "Los Archivos del Terror" en Paraguay se han abierto nuevas posibilidades para aplicar la justicia a los principales agentes represivos del cono sur de América, de tal modo que sus delitos no queden en la impunidad. La esperanza ha renacido en los familiares de las víctimas de la represión en Argentina, Paraguay, Brasil y Chile mientras que el general Manuel Contreras, así como sus protectores y cómplices (Léase Pinochet) "tiemblan" ante las nuevas evidencias de su terrorífico trabajo.

---

“ PINOCHET en Montevideo en 1993 con el teniente coronel Thomas Cassella que mantenía secuestrado a Berríos. En ese mismo período el químico de la DINA fue acallado para siempre.”

## **EL CASO BERRIOS**

### INVESTIGACION FORENSE

El macabro hallazgo mereció unas pocas líneas en los periódicos y pronto quedó en el olvido. En el Instituto Técnico Forense, sin embargo, el antropólogo Horacio Solla siguió durante meses una pista apoyada simplemente en una corazonada.

Solla inició una paciente labor con una técnica relativamente novedosa en Uruguay: la reconstrucción en computadora, de los rasgos de una cara y de la forma de una cabeza, a partir de un cráneo. Una vez fotografiado desde distintos ángulos, y escaneadas las fotografías, la pantalla de la computadora

comenzó a reproducir una imagen ósea tridimensional. Aplicando fórmulas antropológicas, la imagen se fue recubriendo lentamente de cartílagos, tendones, músculos y finalmente piel; los restos de los vellos encontrados en las dunas permitieron incluso reproducir el tipo de barba y cabello levemente canoso. En julio de 1995 las autoridades del Instituto Técnico Forense que habían supervisado el proceso de reconstrucción virtual quedaron anonadadas: la imagen que reproducía la computadora era casi un calco de la fotografía publicada en los diarios que los ministros del Interior, Juan Andrés Ramírez, de Defensa, Mariano Brito, y de Relaciones Exteriores, Sergio Abreu, habían presentado al Parlamento, en agosto de 1993, como prueba de que Eugenio Berríos, secuestrado de la comisaría de Parque del Plata en noviembre de 1992, estaba vivo. Berríos aparecía, barbudo y sonriente, sentado en un sofá junto a un ejemplar de *Il Mesaggero*, de Milán, desplegado en el asiento contiguo, con la fecha de edición bien visible. Esa foto, dos años después, resultaba un testimonio de lo contrario: Berríos estaba muerto.

La justicia se tomó varios meses para confirmar la identidad. Puesto que se desconfiaba del procedimiento técnico de los antropólogos forenses, aunque se admitía la base científica de la suposición, el magistrado González reclamó vía Interpol, ante la policía chilena, algún tipo de registro dental de Eugenio Berríos. La Brigada de Homicidios de la Policía Metropolitana chilena salió a la búsqueda de placas y radiografías y, previsoramente, adjuntó también registros médicos de antiguas fracturas sufridas por el joven Berríos en riñas callejeras durante la presidencia de Salvador Allende. Las placas dentales de Berríos coincidieron con la dentadura del cadáver de El Pinar, pero aun así el magistrado resistió una confirmación de la identidad y propuso un examen de ADN, que obligó a los padres del bioquímico a realizar análisis de sangre. Finalmente, en enero de 1996, la justicia rebautizó la carátula del viejo expediente de 1993 con el rótulo de homicidio, pero en la investigación no avanzó un ápice, como no había avanzado antes bajo el rótulo de secuestro. Los estudios de los forenses Guido Berro, Beatriz Balbela y Guillermo Meza fueron coincidentes en ajustar con precisión la fecha probable de la muerte, que situaron en los primeros días de marzo de 1993, exactamente en el mismo período en que el entonces comandante en jefe del ejército chileno, general Augusto Pinochet, realizaba una visita de carácter privado a Uruguay, y solicitaba al comando uruguayo la deferencia de nombrar como su edecán al teniente coronel Thomas Cassella, el hombre que guarda el secreto del "caso Berríos".

## **DETECTIVES CHILENOS EN LA PISTA**

En vísperas del pase a retiro del general Pinochet y su automática incorporación al Parlamento como senador vitalicio, era necesario archivar el "caso Berríos", cuya investigación policial había avanzado mucho más allá de lo que podían prever los policías y magistrados uruguayos. El voluminoso expediente de 570 páginas del 6° Juzgado del Crimen de Santiago se detiene exactamente en el momento en que la División Metropolitana de Homicidios inicia el interrogatorio del coronel Carlos Alberto Fernando Herrera Jiménez, finalmente identificado como el "Carlos Ramírez" que a fines de octubre de 1991 trasladó a Berríos hasta Montevideo y lo depositó en manos del teniente coronel Thomas Cassella. La prolija investigación de los detectives de Homicidios introduce nuevas luces sobre la vida del bioquímico y llena algunos huecos vitales de la historia que se pretendió enterrar en un médano. Luis Fuentes Sotomayor, inspector; Nelson Jofré Cabello, inspector; y Rafael

Castillo Bustamante, subcomisario, son policías empecinados. En sus fojas de servicio aparece como defecto un sentido del deber que a veces sobrepasa los límites de las órdenes recibidas. Son parte de un equipo que exhibió un celo profesional inconveniente al investigar algunos episodios, como los antecedentes chilenos del asesinato de Orlando Letelier en Washington o el atentado contra Bernardo Leighton en Roma. De hecho, el Grupo Operacional Táctico (GOT) de la Policía de Investigaciones de Chile fue amonestado por seguir pistas que no habían sido expresamente autorizadas. Un interrogatorio al agente Michael Townley, en Washington, todavía bajo el sistema de protección a testigos, a propósito del caso Letelier, derivó casi naturalmente hacia las conexiones chilenas con los grupos fascistas Avanguardia Nazionale y Ordine Nuovo. Las elípticas respuestas de Townley a las preguntas sobre la identidad de quienes le ordenaron "contratar" el asesinato de Leighton (Mamo Contreras no resolvía estas cuestiones por su propia iniciativa, sugirió Townley) ponían directamente en el centro de la escena a Augusto Pinochet. El informe escrito que brindaron los policías a la justicia ya no podía ser ignorado, pero las autoridades del Ministerio del Interior tomaron medidas disciplinarias por el "exceso de celo".

EUGENIO Berríos, el químico de la DINA asesinado en Montevideo. Se vinculaba con narcotraficantes.

Algo similar era posible prever cuando el ministro del Interior, Enrique Krauss, formuló una denuncia ante la justicia por "presunta desgracia del ciudadano chileno Eugenio Berríos". El pedido de investigación recayó en la jueza María Isabel Reyes, quien resolvió iniciar un sumario el 15 de junio de 1993, es decir, una semana después que se conociera en Montevideo el escándalo del secuestro en la comisaría de Parque del Plata(\*). Los tres policías se tomaron en serio la investigación, de modo que al cabo de dos años llegaron a descubrir algunos extremos molestos.

Los detectives comenzaron su tarea por la esposa de Berríos, la ex modelo Gladys Erika Schmeisser, y acotaron tiempos: la última vez que Erika vio a su marido en Santiago fue a comienzos de octubre de 1991. El matrimonio vivía separado, ella en su piso de Viña del Mar y él en casa de sus padres, en la calle Bellet 59, del barrio Providencia, en Santiago. Eugenio estaba acosado por la justicia por libramiento de cheques sin fondos, de modo que Erika no se extrañó cuando a comienzos de noviembre supo que su marido había partido sorpresivamente, sin revelar su destino. Los suegros de Erika suponían que su hijo había viajado a Libia, a Iraq o a Irán, pues en sus apremios económicos el bioquímico fantaseaba con la posibilidad de vender sus conocimientos científicos, a los que se refería con vaguedad, pero vinculados con secretos armamentísticos.

Pero el 8 de noviembre Erika recibió una llamada de larga distancia: "Chanchita, no comentes con nadie, no hables. Estoy en Uruguay, te me vas a las oficinas de PLUNA y retiras un pasaje que compré a tu nombre", dijo Berríos. Erika viajó a Montevideo el 11 de noviembre y regresó dos semanas después. Dice no haber intentado averiguar por qué su marido se escondía en Montevideo. A lo largo de 1992 mantuvo conversaciones telefónicas en varias oportunidades con Eugenio y en octubre de ese año volvió a viajar a Montevideo, esta vez cruzando primero por tierra la cordillera de los Andes hasta Mendoza. La última vez que habló con Eugenio fue dos días antes de la

Navidad de 1992. Para la investigación resultó relevante determinar que Eugenio Berríos estaba vivo un mes después de los acontecimientos de Parque del Plata. Setenta y dos horas después de iniciadas las investigaciones, el 17 de junio de 1993, los policías chilenos accedieron a pistas que cambiaron el curso de las pesquisas. Ese día, el ministro de RR.EE. uruguayo se presentaba ante el Parlamento para informar sobre dos cartas y una foto entregadas en el consulado uruguayo en Milán por un joven que hablaba perfecto inglés. La foto, ya se sabe, pretendía documentar su actualidad con el ejemplar de *Il Messaggero*. Una de las cartas, manuscrita, era enviada supuestamente por Berríos a sus padres. Estaba firmada y fechada 9 de junio; la otra, mecanografiada, estaba dirigida a las autoridades uruguayas. Un perito calígrafo documentó la autenticidad de la firma, contrastándola con la que Berríos estampó al pie de su denuncia, en Parque del Plata, y con la que lucía en una fotocopia de su documento de identidad. El perito se equivocó: Berríos no podía haber escrito la carta, había sido asesinado tres meses antes.

## **LA DINA Y EL NARCOTRAFICO**

Uno por uno todos los personajes mencionados en la supuesta carta de Berríos fueron interrogados (por los policías chilenos); algunos en Madrid, donde cumplían condena por tráfico de drogas. Los testimonios de Manuel Novoa, Hernán Prieto, Enrique Palavicino, Carlos Board, Rodríguez Núñez, "el Aragonés", Hernán Monje, Hernán López y el peruano Máximo "Bocanegra" Guevara, confirmaron la vinculación de Eugenio Berríos con el narcotráfico y aportaron nuevos elementos de la personalidad del bioquímico; pero, quizás inadvertidamente para el redactor de la carta, permitieron también establecer ciertos vínculos entre el negocio del narcotráfico y los antiguos agentes de la DINA, hasta que la pista aportada completó un círculo y regresó al comienzo, enriqueciendo las razones por las que el aparato de inteligencia militar chileno se involucró en una operación encubierta de coordinación. Fue en ese momento que la investigación se estancó.

La lista inicial de nombres aportados en la carta de Milán se incrementó rápidamente. Todos los personajes giraban en torno a un puñado de locales nocturnos (en Santiago): Oliver, Les Assassins, Crazy Horse, frecuentados por narcotraficantes, consumidores de cocaína y muchos ex agentes de la DINA. Los indagados, casi sin excepción, reclamaban inocencia (sobre el narcotráfico). Eran explícitos, en cambio, sobre las confidencias que, drogado o bebido, Eugenio Berríos destilaba sobre su pasado de agente secreto. Así, Viviana Patricia Egaña, una actriz que frecuentaba Les Assassins, que se enamoró perdidamente de Berríos y que vivió con él entre 1983 y 1986, cuenta cómo el bioquímico hacía experimentos en el laboratorio instalado en la cochera de la calle Bellet, con gatos que él asfixiaba con sus propias manos. Berríos solía recibir tarjetas de saludo de Michael Townley y la visita del capitán Armando Fernández Larios. Viviana recuerda haber conversado brevemente con el hijo del general Contreras en una ocasión en que Berríos la llevó al bar Oliver, donde se reunían "puros militares, pero de civil".

Berríos solía montar en cólera, descontrolarse y amenazar de muerte a Viviana: "En una ocasión peleamos, se dirigió a un mueble y sacó un frasco muy pequeño de perfume. Me dijo: 'Sabe, pellito, si usted se me porta mal, yo la mato con esto', pero nunca supe qué me quiso decir". Viviana nunca relacionó el frasco de perfume con el gas Sarín.

Viviana creía que podía manejar el malhumor de Berríos; en cambio, sentía un temor profundo cada vez que un tal "Arroyo" llegaba de visita a la casa. De hecho, Arroyo, "un tipo parco, serio, muy duro", seguía a Berríos a todos lados, era como su sombra. "En otra oportunidad escuché, tanto de Eugenio como de Arroyo, que éste había matado a un tal Carmelo Soria", declaró Viviana a la justicia. Cada vez que Berríos se enojaba con Viviana, reclamándole dinero o cheques, "me amenazaba diciéndome que Arroyo ya había matado personas y que a mí me podía suceder lo mismo".

No fue el temor, sino la indignación, lo que provocó la ruptura de Viviana con el bioquímico: en 1986, durante un fin de semana en una casa de campo de un amigo de Berríos, Viviana salió de compras, "y al regresar los encontré a ambos acostados en la cama, comprobando que Eugenio y el otro eran homosexuales". No obstante, Viviana mantuvo relación con Berríos y más tarde con su esposa Erika, pero decidió esconderse cuando se difundió el secuestro y la desaparición, por temor a las represalias de Arroyo.

Otros indagados dejaron constancia de las indiscreciones de Berríos. Juan Carlos Cheyre, dueño de Les Assassins, confirmó que Berríos solía distribuir entre sus amigos anfetaminas que decía fabricar; y contaba su participación en el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, entre otras historias de la época del cuartel de Townley en Lo Curro.

El gas Sarín ronda siempre en las declaraciones. David Manuel Morales, ex integrante del movimiento fascista Patria y Libertad, confirmó que en 1979 Berríos había entregado la fórmula del Sarín al Alto Mando, Complejo Químico Lo Aguirre. Morales tenía razones para saberlo, porque él conectó a Berríos con su conocido, el coronel Víctor Barría, para restablecer un contacto con el general Contreras. De esa época data la presencia constante de Arroyo en torno a Berríos.

## **TRAFICANTES Y AGENTES**

Fue Manuel Andrés Novoa quien confirmó a los policías la misión del hombre que provocaba un temor incontrolable en Viviana Egaña. En su celda de la cárcel de Alcalá, Madrid 2, donde permanecía recluido desde octubre de 1991 por tráfico ilícito de cocaína, Novoa identificó a Arroyo como un ex agente de la DINA, encargado de custodiar a Berríos por orden del general Contreras. Los policías no tardaron en establecer la verdadera identidad de Arroyo: José Remigio Ríos San Martín, un suboficial del ejército que integraba la estructura "informal" de la ex DINA, desde su disolución a fines de los años 70. Lo que se cuidó de mencionar Novoa era que él, antiguo estudiante de derecho, comerciante, empresario, y finalmente traficante de cocaína, al igual que Berríos había sido agente civil de la DINA. La pista inicial surgió al investigar las cuentas bancarias de Berríos. Una caja de seguridad en la sucursal Providencia del Banco de Crédito e Inversiones deparó una momentánea frustración, al ser abierta mediante orden judicial: entre los papeles de Berríos no había ningún testimonio, a modo de salvoconducto, que revelara la historia secreta de la DINA; pero se incautaron los documentos de algunas sociedades anónimas y empresas de las que el bioquímico había sido socio fundador. Una de ellas, Ibercom Chile, resultó ser una pantalla para las actividades de la DINA en Europa. El socio de Berríos en Ibercom era Alberto

Comunián Pivari, miembro de Avanguardia Nazionale, citado como testigo por la justicia italiana en relación con el atentado contra Bernardo Leighton. En Fitoquímica Nacional, una empresa de productos agroindustriales que, después se comprobó, fue parte de un complejo para la fabricación y exportación de cocaína, el socio de Berríos era Manuel Andrés Novoa. En la mayoría de los casos, el abogado de las firmas era Enrique Palavicino, también ex agente civil de la DINA.

El testimonio de Juan Enrique Momberg Villarroel, de profesión estafador, deportado desde España (a Chile) después de cumplir condena, confirma la vinculación de los traficantes de droga con elementos de la policía secreta de la dictadura. Su contribución al conocimiento de la estructura delictiva provocó un alud de detenciones. Novoa y Palavicino operaban como mano derecha de Rodolfo Robinson Carril, el "segundo" en la organización que dirigía un peruano con documentos falsos a nombre de Jorge Acosta y que en realidad se llama Justo Cornejo Hualpa. El negocio de Cornejo Hualpa -involucrado en una operación de 285 kilos de cocaína decomisados a bordo del Eten, barco de la Armada peruana- consistía en comprar cocaína en Perú e introducirla en Chile, desde donde la exportaba a Australia, Alemania o España. Su principal proveedor en Perú era el ex comandante de la Guardia Nacional, Percy Lazo, detenido en España por tráfico ilícito de estupefacientes. Fue de Lazo la idea de transportar cargamentos de 25 ó 30 kilos en los tanques de gasolina de autos, en los baúles y hasta en los faros que cruzaban la frontera con Chile. Novoa y Palavicino, que colaboraban con Robinson en operaciones de lavado de dinero manipulando cheques, introdujeron en la organización de Cornejo Hualpa a Eugenio Berríos y al periodista Emilio Rojas, un habitual parroquiano de los bares y restaurantes que frecuentaba el bioquímico y donde se codeaba con ex agentes de la policía secreta, a pesar de que él, Rojas, había sido torturado durante la dictadura en la unidad militar de Tejas Verdes (y estuvo luego en el campo de prisioneros de Chacabuco).

Encandilado por Berríos con sus cuentos sobre el gas Sarín, Novoa entusiasmó a sus socios narcotraficantes con una idea en principio descabellada: una fórmula para eliminar el olor que delata los cargamentos de cocaína. Berríos y Emilio Rojas formaban parte de los invitados que solían emborracharse los fines de semana en la residencia rural de Cornejo Hualpa, una verdadera fortaleza que gozaba de la protección de la policía local. Este narcotraficante -el único de los indagados que no pudo ser detenido- mostró un marcado interés cuando el periodista Rojas anunció su nombramiento como agregado de prensa en la embajada de Chile en Uruguay. Acaso fue una coincidencia, pero ya para entonces el nombre de Eugenio Berríos se multiplicaba en el expediente del juez Adolfo Bañados sobre el caso Letelier, y su citación ante el tribunal se tornaba inminente; era perentorio evacuarlo. Novoa recuerda que muy poco antes de su desaparición, en un encuentro al que asistió el "ángel guardián" Arroyo, Berríos dijo enigmáticamente: "No me dejan tranquilo, voy a tener que irme". Novoa supuso que se refería a sus acreedores, que eran legión, pero Berríos aclaró que esta vez iba a escapar "con chapa", es decir con documento falso proporcionado por los ex jefes de la

### **DINA. DROGA CON INMUNIDAD DIPLOMATICA**

Para entonces Novoa había viajado en tres oportunidades a Montevideo y se había alojado en la casa de Rojas; incluso había visitado la embajada. Las negociaciones de Novoa con el encargado de prensa culminaron en una reunión "cumbre" en Buenos Aires. Rojas y Novoa se trasladaron desde Montevideo; Cornejo Hualpa y

Robinson lo hicieron desde Santiago, por tierra. En los baños turcos del hotel Libertad, Cornejo Hualpa propuso a Rojas utilizar su pasaporte especial y la valija diplomática para introducir cocaína en Montevideo, en tránsito hacia Europa y Australia. El narcotraficante estimaba que esa vía podía ser muy lucrativa y segura, porque, además, su organización contaba con otro aliado en la misión diplomática (chilena) en Montevideo, el hijo del cónsul (Federico Marull). Según Novoa, Rojas postergó una decisión; pero Juan Enrique Momberg confesó que un cargamento de nueve kilos de cocaína, parte de uno más grande de 54 kilos, fue acondicionado en el local de la firma exportadora Susset, propiedad de Cornejo Hualpa, en una maleta que retiraría Emilio Rojas.

Para finales de 1991, de acuerdo a los testimonios, Rojas manipulaba con cierta frecuencia cargamentos de droga en Montevideo. Cerca de las fiestas de fin de año, de vacaciones en Chile, Rojas fue visto una vez más en las instalaciones de la firma Susset. Pero poco antes de retornar a Montevideo recibió la visita del señor Rodrigo Arteagabeitia, encargado de relaciones públicas de la Policía de Investigaciones. Fue una conversación informal: acaso Rojas estaría dispuesto, propuso Arteagabeitia, a mantener una entrevista con un señor Aránguiz, detective de la total confianza del juez Bañados, porque el magistrado sospechaba que Berríos, el testigo que se le acababa de escapar de las manos, podía estar en Uruguay. Rojas accedió y se entrevistó con el detective al día siguiente en las oficinas de una emisora de radio. La reunión fue turbulenta: el detective insinuaba que Berríos podía tomar contacto con el agregado de prensa y que acaso ya lo había hecho. Rojas se ofendió: si él tuviera noticias del paradero de Berríos lo habría comunicado inmediatamente; por otro lado, dijo, no mantenía ninguna relación con Berríos, salvo algún saludo protocolar cuando coincidían en lugares públicos. Por una vez, Rojas decía la verdad. Fue a su regreso a Montevideo, en enero de 1992, que recibió en su domicilio una llamada telefónica de Eugenio Berríos. Era una llamada local. Berríos se había comunicado con la embajada y allí le habían proporcionado el número telefónico particular del agregado de prensa. Rojas se puso nervioso. Comentó el incidente con el agregado militar, el general Emilio Timmerman. "Berríos nos está saliendo muy caro", admitió el militar, aunque no se entiende por qué confesaba el conocimiento oficial del operativo ante un diplomático a quien la dictadura juzgó oportuno torturar. (Más adelante Blixen relata la investigación en Montevideo de los detectives chilenos Rafael Castillo Bustamante y Nelson Jofré Cabello, en octubre de 1993. Lograron identificar al oficial chileno Carlos Herrera Jiménez como la persona que alquiló un departamento de la capital uruguaya, donde vivió Berríos. El aval para el alquiler lo prestó el coronel Thomas Cassella de la inteligencia uruguaya. Herrera - actualmente preso en Punta Peuco por la tortura y muerte de un transportista en La Serena-, estaba encargado de vigilar a Berríos en Montevideo, hasta donde lo acompañó, y probablemente tuvo participación en su muerte).

La última actuación policial relevante en el expediente del Juzgado del Crimen de Santiago es el interrogatorio al que fue sometido el 16 de septiembre de 1996 el oficial en retiro Carlos Herrera Jiménez, tras su extradición desde Argentina. Dijo haber viajado en octubre de 1991 a Montevideo por cuestiones de negocios, y haber conectado allí a Thomas Cassella, viejo amigo al que conoció en Chile cuando el militar uruguayo viajaba frecuentemente, en épocas de las dictaduras, para realizar "cursos de paracaidismo". Negó rotundamente haber introducido clandestinamente al bioquímico en Uruguay y sólo admitió haberlo conocido ocasionalmente, una noche, en la tanguería La Cumparsita. Herrera estaba con otros chilenos, a los que no identificó, y Berríos se acercó a su mesa. La charla continuó en su apartamento de Pocitos, donde Berríos permaneció "un par de días, porque estaba en mala

situación económica y no tenía dónde dormir". Las flagrantes contradicciones entre su versión y el resultado de las investigaciones policiales quedaron en el tintero. Cuando finalmente, y después de recorrer un largo trecho salpicado de cocaína, la investigación prometía avanzar en línea recta, el caso fue enterrado. El expediente fue finalmente archivado en Chile por decisión de las instancias superiores de la justicia. A modo de compensación, y quizás como documento histórico, fue incorporado al expediente judicial el sumario administrativo del Ministerio de RR.EE. chileno para determinar la conducta de los diplomáticos y funcionarios de la embajada en Uruguay. Casi cien fojas que revelan detalles desconocidos y aportan una convicción: casi todos los funcionarios de la representación diplomática tenían elementos de juicio para presumir la presencia de Eugenio Berríos en Uruguay, mucho antes del episodio de la comisaría de Parque del Plata; algunos tuvieron noticias incluso al mes del arribo del ex agente de la DINA. La conclusión es inevitable: Berríos podría estar vivo, todavía, si cada uno de los funcionarios, por distintas razones, no hubiera optado por el silencio. De la lista se exceptúa el general Emilio Timmerman, cuya función era, precisamente, coordinar el ocultamiento de Berríos y que, por razones que no se explican en el sumario administrativo, no fue interrogado como el resto de los funcionarios, desde los administrativos hasta los embajadores. Timmerman está considerado como un hombre de confianza de Augusto Pinochet.

## **OPERACIONES DE LA "RED GLADIO"**

¿Quién mató a Juan José Torres?

Desde Buenos Aires, Martín Sivak

A las ocho de la noche del 2 de junio de 1976, el principal Rubén Tesore, recibió un llamado anónimo: "Hay un hombre muerto debajo del puente Giles".

Recorrió 16 kilómetros y en media hora llegó al lugar, junto al comisario Euclides Barcia. El puente, de barras de hierro y 20 metros de longitud, estaba dentro de la zona del cuartel séptimo en el kilómetro 193 de la ruta provincial que une las localidades de San Andrés de Giles y San Antonio de Areco en la provincia de Buenos Aires. El hombre, de cutis trigueño, cabello negro entrecano y bigotes, tenía tres balazos: uno en la cabeza y dos en el cuello. Los ojos estaban vendados, las muñecas erosionadas y en el dedo anular izquierdo le faltaba. Entre el 6 y el 7 de octubre de 1970, Bolivia tuvo cuatro gobiernos en 24 horas. El último de ellos estuvo conducido por Torres, quien prolongó su mandato durante diez meses. Fue la revolución militar número 185 en 145 años de vida republicana. Cuando asumió la presidencia se había definido "nacionalista y revolucionario". El periodista (montonero) argentino Rodolfo Walsh, quien responsabilizó en 1977 a los comisarios Juan Gattei y Antonio Gettor por su asesinato, lo llamó "el general proletario".

Durante su gobierno Torres avaló la Asamblea Popular -considerada el primer sóviet de América Latina-, nacionalizó minas que eran propiedad de empresas estadounidenses, expulsó a los cuerpos de paz de Estados Unidos, liberó a Régis Debray y articuló una alianza férrea con los mineros. El 21 de agosto de 1971 llegó el golpe de Estado del coronel Hugo Banzer Suárez, apoyado por la embajada estadounidense, el ejército brasileño, el gobierno argentino de Alejandro Lanusse y la colonia alemana, donde estaba el criminal de guerra nazi Klaus Barbie. Torres inició su exilio en Perú, luego fue a Chile, donde una bomba estalló en su casa, y terminó en Argentina. En 1974 formó la Alianza de la Izquierda Nacional (Alin) y se constituyó en la amenaza más seria para la dictadura de Banzer. Para junio de 1976 Torres proyectaba entrar clandestino a Bolivia para cuestionar

el acuerdo de Banzer y Pinochet sobre la salida al mar y según su representante en Bolivia, el mayor Rubén Sánchez, esperaban realizar una insurrección popular para setiembre u octubre de ese año. Antes debía salir de Argentina e ir a Venezuela para asistir a una cumbre de ex presidentes. Pero la embajada de ese país, de manera misteriosa, le denegó la visa.

El martes 1 de junio de 1976 a las ocho y media de la mañana, Torres caminaba por Barrio Norte de Buenos Aires con el obrero boliviano Benjamín Centeno. Cuando llegaron a la esquina de Pueyrredón y Mansilla se despidieron. Torres tenía una cita con el general Juan Guglielmelli, a la que no llegó nunca. A 30 horas de la desaparición de Torres, el ministro del Interior argentino Albano Harguindeguy, en conferencia de prensa, denunció: "Nadie puede atestiguar que haya sido secuestrado como pretenden hacer aparecer informaciones familiares y periodísticas que califico de tendenciosas. Porque si yo, por el solo hecho de faltar 30 horas de mi casa -lo puedo hacer en un acto voluntario o involuntario-, si no tengo datos, no puedo decir que he sido secuestrado". Pese a sostener que no tenía indicios, aseguró que "el gobierno de Bolivia no tuvo ninguna intervención". Dos horas después de que concluyera la conferencia, la policía encontró el cuerpo de Torres.

En el primer comunicado, tras conocerse la noticia, el gobierno de Banzer expresó su gratitud por "el ejemplar comportamiento del gobierno argentino". A las pocas horas tomó la decisión de no permitir la repatriación de los restos del ex presidente a Bolivia y por ello se produjeron levantamientos en las minas y varias manifestaciones donde murieron dos estudiantes. Banzer tuvo que decretar el estado de sitio.

Harguindeguy y Banzer se reencontraron en 1980 en el departamento del mayor del ejército argentino Hugo Raúl Miori Pereira, quien fue miembro de la red de militares argentinos que actuó en Centroamérica, dirigidos por un presunto cóndor: el coronel Osvaldo Ribeiro. El periodista estadounidense Martín Andersen en su libro Dossier Secreto señaló: "Un informe sugiere que el crimen (de Torres) fue llevado a cabo por rangers bolivianos que contaban con el apoyo de la Policía Federal, y que había sido aprobado por el mismo Harguindeguy". La versión de los rangers es poco probable, porque el funcionamiento del sistema cóndor boliviano no admitía operativos fuera del país con agentes propios, según el testimonio de varios ex cóndores bolivianos.

La banda de Aníbal Gordon "Lo de Torres fue la gente del viejo (por Aníbal Gordon), pero yo no estuve en ésa; ni siquiera sé bien cómo fue", dijo un ex miembro de la banda de Aníbal Gordon.

Cuando venía a Buenos Aires, Zilvetti García (secretario privado de Torres) se alojaba en el departamento de Oroza -el testigo clave de la causa Torres y presuntamente asesinado-, que está ubicado en la calle Sánchez de Bustamante 2144, a tres cuadras del centro O/01 (Operaciones Tácticas), que era utilizado por la banda.

El coronel Carlos Antonio Mateos, alias "Gaucho", jefe de Aníbal Gordon en el batallón 601, poseía un campo en General Villegas, donde permaneció secuestrado, entre otros, el dirigente justicialista Julio Bárbaro.

A 365 días del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Rodolfo Walsh, quien durante ese año puso en marcha la Agencia Clandestina de Noticias (Ancla), se refirió en su "Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar" al secuestro y muerte de Torres, Michellini, Gutiérrez Ruiz y de otros exiliados latinoamericanos, Walsh denunció "la segunda participación en esos crímenes del departamento de Asuntos

Extranjeros de la Policía Federal, conducido por los oficiales becados de la CIA a través de la AID, como los comisarios Juan Gattei y Antonio Gettor, sometidos ellos mismos a la autoridad de Mister Gardner Hathaway. Station Chief de la CIA en Argentina es semillero de futuras revelaciones como las que hoy sacuden a la comunidad internacional.

En 1974 Juan Gattei era jefe de la División de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal y estaba encargado de la seguridad del exiliado chileno, general Carlos Prats. A las 0.40 del lunes 30 de setiembre de ese año, Prats murió, junto a su esposa, al explotar una bomba colocada en su automóvil. De manera curiosa, minutos después del estallido en la calle Malabia, llegó Gattei. Según Walsh, Gattei era uno de los nexos entre la CIA y la Triple A. También dirigió en 1975 un comando de la Triple A encargado de la persecución y ejecución de exiliados latinoamericanos, que fue parte de un acuerdo firmado por Alberto Villar con jefes policiales de Uruguay, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay. "A partir del momento en que Villar fue designado director general de Orden Urbano, y posteriormente, subjefe de la Policía Federal mantuvo un permanente contacto con personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de seguridad. El otro acusado por Walsh, comisario general Antonio Gettor integró la sección o grupo Superintendencia de Seguridad Federal. A partir de diciembre de 1977 fue director de la sección Delitos y Vigilancia, dependiente de la jefatura de Superintendencia de Investigaciones Criminales.

De cara regordeta y ojerosa, Gettor dejó su puesto de superintendente de investigaciones, y el 15 de diciembre de 1982 llegó a la cumbre de su carrera: asumió como subjefe de la Policía Federal. El 2 de julio de 1983, Gettor fue el único orador de un acto en homenaje a los caídos en el cumplimiento del deber y en "la lucha contra la subversión". "Enfrentemos a los mensajeros internacionales del delito, el ocaso y la violencia", exigió Gettor, acompañado por el entonces jefe de la Policía Federal, Juan Bautista Sasaiñ y el General Jorge Rafael Videla.

#### La conexión boliviana

"Ahora me las van a pagar, Torres. Ya no voy a conformarme con hacerlo poner en la frontera, si no van a ver lo que les pasa", fue una de las tantas amenazas que disparó el agregado militar de Hugo Banzer en Buenos Aires, coronel Raúl Tejerina Barrientos. En 1973, Tejerina fue jefe de policía nombrado por Banzer y después del asesinato de Torres fue ascendido a general y jefe de la Casa Militar. "Siempre he sido fiel a Banzer, con quien somos compañeros de curso en la carrera militar", dijo Tejerina en Bolivia. Dueño de una inmensa casa en el barrio residencial de Sopocachi, en La Paz, y tres autos.

En 1976, cuando Tejerina era agregado militar, el cónsul boliviano en La Plata, Eduardo Banzer Ojopi -primo del general Hugo Banzer- "visitaba periódicamente la embajada", según declaró en los tribunales argentinos una amiga de Hugo Banzer. Diversos testimonios y fuentes reservadas aseguraron que Tejerina organizaba grupos de vigilancia y control contra Torres y otros exiliados, con el respaldo del propio Eduardo Banzer. El auto del consulado fue visto varias veces cerca del departamento de Torres.

José Oroza, un empleado de la embajada, era el testigo más importante de las amenazas de Tejerina a Torres. Al día siguiente del crimen del ex presidente, Tejerina fustigó a Oroza por haber ventilado "secretos de embajada". El 14 de noviembre de 1976, Oroza falleció y no se le practicó autopsia. Para la justicia argentina fue una "muerte sospechosa de criminalidad". Su familia sostiene la

hipótesis del envenenamiento.

No es la única muerte que rodea al caso Torres. El 11 de mayo de 1976 fue asesinado el embajador boliviano en Francia, general Joaquín Centeno Anaya, en el puente Bir-Hakeim de París. No tan lejos de allí, en la avenida Pincaré, había sido asesinado el coronel uruguayo Ramón Trabal el 19 de diciembre de 1974. Centeno Anaya, quien participó en la captura y asesinato de Ernesto "Che" Guevara, estaba enfrentado a Banzer y pese a que la inexistente "Brigada Che Guevara" se adjudicó el homicidio, hay varios indicios de que habría participado el terrorista italiano Stefano Dellechiaie, agente cóndor y miembro de la internacional negra. En el instante del asesinato de Centeno Anaya, el dictador uruguayo Juan María Bordaberry estaba reunido con Banzer en Santa Cruz de la Sierra, donde acordaron declarar "una lucha abierta al comunismo".

Tres juntas, tres cuerpos, 471 fojas con los números de la causa Torres, cerrada en 1987 por la justicia argentina. El segundo magistrado del caso fue Orlando Juan Gallo, ex diputado del partido MODIN e impulsor de la frustrada candidatura presidencial del General argentino Juan Carlos Onganía. Bajo un retrato suyo con el General español Francisco Franco, Gallo reconoció que siempre vio "el nexo entre el asesinato y la embajada boliviana". Pero tuvo serias dificultades para explicar por qué no llamó a declarar a Tejerina, Banzer y a Harguindeguy. "¿Qué es la Operación Cóndor y quién es Michael Townley?", preguntó. El abogado de la familia Torres, Jorge Manuel Baños (quien luego muriera durante el copamiento a La Tablada en 1989), no pudo viajar a Bolivia por presiones diplomáticas. Los Torres insisten en la responsabilidad de Banzer en el asesinato del ex presidente, el más misterioso de la historia de Bolivia, y esperan reabrir la causa en poco tiempo.



Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE, Web del Centro Estudios "Miguel Enríquez", CEME: <http://www.archivo-chile.com>

Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) Envía a: [archivochileceme@yahoo.com](mailto:archivochileceme@yahoo.com)

**NOTA:** El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos autores.

© CEME web productions 2005

